

Señora

JUEZ 14 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

ESD

**REF: PROCESO DECLARATIVO - VERBAL (R.M). DEMANDANTES: HERNANDO ENRIQUE MEZA ORTIZ Y OTROS. DEMANDADOS: EPS SURA Y OTROS. RADICACIÓN: 08-001-31-53-014-2024-00146-00**

**CARLOS ERNESTO QUIÑONES GOMEZ**, apoderado de EPS SURA, me permito interponer recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto admisorio de la demanda de fecha 24 de julio de 2024, por las razones que siguen:

1.- La ley procesal civil, como lo prescribe el CGP, es de orden público y obligatorio cumplimiento. En consecuencia, ni las partes ni el juzgador puede desatender lo que en la misma se prescribe, ordena o manda, como tampoco puede ser inaplicada o derogada para un caso particular y concreto.

2.- El artículo 82 del CGP, en consecuencia, es de obligatorio cumplimiento, lo que supone el que, lo que en dicha disposición se prescribe debe acatarse por las partes, en especial por quien tiene la condición de demandante.

3.- El numeral 5 del artículo 82 citado, indica que la demanda con que se promueva todo proceso debe contener “Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados”.

Tal exigencia, entonces, va orientada, a que el demandante incorpore, en el aludido acápite de la demanda, solo hechos, los cuales deben ser numerados, diferenciados y debidamente clasificados.

3.1.- Revisada, desde el punto de vista formal, la demanda (en su versión subsanada) que la parte demandante le remitió a mi mandante, a efecto de surtir su notificación, mi representada observa que en el acápite IV de la misma, titulado HECHOS, el demandante no precisa, en cada numeral, hechos debidamente separados, clasificados y numerados, a la vez que incorpora transcripción extensa de documentos, historias clínicas, sin perjuicio, también, de incorporar imágenes, entre otras consideraciones de orden jurídico que, no pueden presentarse como hechos base de la pretensión.

Consideramos, en este punto, que la demanda incurre en una deficiencia formal no advertida por el despacho, que inhibía su admisión, en atención a lo que prescribe el artículo 90 del CGP, que dispone, además, que la demanda que sea inepta desde el punto de vista formal debe ser inadmitida.

4.- Por otro lado, se sabe que, a la luz de lo que prescribe el artículo 82 del CGP en concordancia con el artículo 206 del mismo estatuto, en toda demanda con la que se reclame perjuicios materiales, debe inexorablemente el demandante presentar el juramento estimatorio.

El artículo 206 ibidem, en dicho sentido, prescribe que

“Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda...”.

La expresión “razonadamente” presupone que la estimación juramentada no solo debe hacerse en forma ordenada, sino también incorporando la explicación racional de la manera en que la parte actora llega a las sumas o valores que reclama por el mentado concepto.

No basta hacer afirmaciones. No basta decir que se hace “bajo juramento”. El calificativo de razonada supone incorporación de razones y si se trata de sumas de

dinero que deben obtenerse a través de la aplicación de formulas jurisprudencialmente definidas, también debe incorporarse el ejercicio matemático que permita conocer si el resultado obtenido se ajusta a la aplicación de tal formula.

4.1.- La parte demandante, en el acápite denominado juramento estimatorio, dice estimar el monto de lo que reclama, por concepto de daño patrimonial bajo la denominación de daño emergente y lucro cesante.

Si el despacho revisa cuidadosamente tal estimación, la misma no tiene nada de razonada, al punto que no explica en forma detallada y precisa como se obtienen las sumas que allí se enuncian. De hecho, la propia parte actora, en un acto de dubitación sobre lo que jura dice que si no es la suma que propone, la suma que reclama sería aquella que “resulte probado”.

Otro tanto hay que decir del lucro cesante que estimó la parte accionante. Se dice por la demandante en el acápite ya aludido:

“2.2. Por concepto de perjuicio material en la modalidad daño lucro cesante: seiscientos noventa millones trescientos mil pesos (\$ 690.300.000).

-. Se condene a la E.P.S. SURAMERICANA - E.P.S. SURA, CLÍNICA PORTOAZUL S.A. - CPA, MÉDICO TRATANTE JUAN FELIPE ARIAS BLANCO al pago de indemnización por la pérdida del chance o la oportunidad de recuperación y de recurrir a tratamiento oportuno.

En consecuencia, se ordene el pago del lucro cesante desde el momento de su fallecimiento (24/10/2021) hasta su fecha probable de vida (21/01/2066) esto es 531 meses de vida, correspondiente a los ingresos que como fisioterapeuta y esteticista percibía mensualmente la señora Kelly Yohana Meza Mercado (QEPD), que ascendían a la suma de un salario mínimo mensual equivalente a (\$1.300.000) o lo que resulte probado. Los cuales fueron dejados de aportar a su menor

hija Marianna Zabaleta Meza, lo cual equivale a seiscientos noventa millones trescientos mil pesos (\$ 690.300.000)".

Y se pregunta mi mandante: cómo fue obtenida la suma de \$ 690.000.000 m.l. que se reclama por lucro cesante? Solo se dice que la misma se define teniendo en cuenta la vida probable de vida de alguien quien no se identifica y que se asume es la señora Kelly Yohana Meza Mercado. Y luego se dice que ello corresponde a lo que se dejó de aportar a su menor hija Marianna. Pero, o se calculó ese valor atendiendo a la vida probable de la señora Meza Mercado o se calculó atendiendo al derecho que, según la parte actora, le corresponde a la menor Marianna? No se explica nada sobre el particular.

Entonces, no hay explicación alguna en lo que se estima. Tampoco se establece cómo o bajo que parámetros económicos se define la suma por concepto de lucro cesante. Mucho menos se aplican las formales que, para la liquidación de un lucro cesante, ha definido la jurisprudencia.

4.2.- Si el demandado, como lo prescribe el mismo artículo 206, tiene el derecho de contradecir y objetar el juramento estimatorio, es fundamental que este se presente dicho juramento con la explicación de cómo se obtiene y no dejar a la interpretación del accionado o del juez, lo que el demandante debe RAZONADAMENTE exponer desde el inicio del juicio.

4.3.- El artículo 90 del CGP, dispone, también, que es causal de inadmisión de la demanda el que la misma tenga defectos formales o que no contenga juramento estimatorio. En este caso se presenta una estimación, pero la cual no cumple con las reglas del artículo 206, lo que equivale a que no se presentó en legal forma, aspecto este que conducía a que la demanda fuera inadmitida.

5.- El artículo 590 del CGP prescribe que la caución, en un procesal declarativo, se debe liquidar con base en las pretensiones estimadas en la demanda. Lo que no debe entenderse como las pretensiones económicas patrimoniales estimadas en la demanda. Si fuera esta la manera de comprender la regla, entonces en aquellos

eventos en lo que el demandante solo pida perjuicios extrapatrimoniales, los que no debe estimar bajo juramento (art. 206), no tendría la obligación de caucionar, porque la caución solo se calcula con base en las pretensiones económicas patrimoniales.

Pues bien, el despacho en el numeral tercero del auto censurado resolvió:

“3. Ordénese a la parte demandante prestar caución en alguna de las modalidades que establece el artículo 603 del C.G.P., por valor de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$190.000.000), dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, a fin de emitir un pronunciamiento respecto de las medidas cautelares rogadas”.

Queda claro que el despacho aplicó la regla del 20% que establece el artículo 590 citado y así lo indica en la parte motiva de su auto. Pero, la aplicó solo sobre las pretensiones económica patrimoniales. Y no sobre la totalidad de las pretensiones reclamadas por el demandante, que incluyen el reconocimiento de un perjuicio extrapatrimonial.

Si se suma lo pretendido por perjuicios patrimoniales con lo pretendido por perjuicios extrapatrimoniales se concluye que el 20% de dichas sumas no es \$ 190.000.000.

En efecto, se pretende por perjuicio extrapatrimonial la suma de 500 SLMMV (al 2024 eso es \$ 650.000.000). Y se pretende por perjuicio patrimonial la suma de \$ 950.000.000. Todo lo anterior suma la cantidad de \$ 1.600.000.000 m.l.

El 20% de \$ 1.600.000.000 m.l. es \$ 320.000.000 m.l.

Por ello, consideramos que erró el despacho al fijar el monto la caución en el numeral tres de la parte resolutive del auto censurado, máxime cuando las medidas que se

piden por los demandantes no solo buscar asegurar un fallo a su favor por perjuicio patrimoniales, sino por la totalidad de lo que reclama; por todo lo expuesto se formula la reposición y en subsidio apelación contra esta decisión.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente se acepten las siguientes

### **PETICIONES**

1.- Se REVOQUE total e íntegramente el auto admisorio de la demanda de fecha 24 de julio de 2024, y en su lugar se proceda, por las razones expresadas a INADMITIR la demanda.

2.- En cualquier caso, se modifique la decisión del despacho, visible en el numeral 3 de la parte resolutive del auto censurado, la cual debe quedar así:

“3. Ordénese a la parte demandante prestar caución en alguna de las modalidades que establece el artículo 603 del C.G.P., por valor de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$320.000.000), dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, a fin de emitir un pronunciamiento respecto de las medidas cautelares rogadas”.

En caso de no aceptar la reposición solicitamos se nos conceda la apelación incoada.

Respetuosamente,

**CARLOS ERNESTO QUIÑONES GOMEZ**

**CC 72.197.791**

**TP 93032**